

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 73
O R D I N A R I A
JUEVES 1° DE JULIO DE 2010

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del jueves primero de julio de dos mil diez, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta relativo a la sesión pública número setenta y dos, ordinaria, celebrada el jueves veinticuatro de junio dos mil diez.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 73

Jueves 1° de julio de 2010

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves primero de julio de dos mil diez.

II. 1. 66/2009

Solicitud de revocación (II) del auto de suspensión dictado el veinticuatro de julio de dos mil nueve en el incidente de la controversia constitucional 66/2009, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y del Secretario de Gobierno de la misma entidad. En el proyecto formulado por señor Ministro Juan N. Silva Meza se propuso: *“PRIMERO. Se modifica el auto de suspensión de veinticuatro de julio de dos mil nueve, dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil nueve. SEGUNDO. Subsiste la negativa de suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, conforme a lo determinado en dicho proveído, respecto de los actos de promulgación y publicación del decreto legislativo impugnado en la demanda inicial. TERCERO. Se niega la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos legislativos atribuidos al Congreso del Estado de Morelos, inherentes al nombramiento y designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como de un Consejero de la Judicatura estatal, inclusive por lo que ve a sus adscripciones e incorporación en nómina, con las*

Sesión Pública Núm. 73

Jueves 1° de julio de 2010

prestaciones y salarios que constitucional y legalmente les correspondan en razón de la fecha de su designación y toma de protesta, conforme a los decretos legislativos mil quinientos sesenta y ocho y mil quinientos sesenta y nueve, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos el veintinueve de julio de dos mil nueve. CUARTO. Notifíquese por lista y mediante oficio a las partes”.

El señor Ministro Ponente Silva Meza precisó los antecedentes que informan al presente asunto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó a favor de la propuesta del proyecto y solicitó suprimir de éste las consideraciones visibles en las fojas ochenta y cinco y ochenta y seis relacionadas con la materia del estudio de fondo, lo que se aceptó por el señor Ministro Ponente Silva Meza.

El señor Ministro Valls Hernández estimó que existen circunstancias incuestionables que justifican la revocación de la suspensión otorgada previamente, por lo que manifestó que votaría a favor del proyecto.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló compartir la propuesta del proyecto, salvo considerar como hecho superveniente las resoluciones dictadas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, hizo referencia a un escrito remitido por un delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos en el cual se sostiene que aquél no se encuentra desintegrado y que ***** sigue siendo Magistrado hasta en tanto no se nombre a una persona en su lugar, considerando que ambos planteamientos son incorrectos por lo que propuso darles respuesta en el proyecto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia mencionó que en el Poder Judicial de la Federación se ha aceptado, en materia de amparo, que el dictado de la resolución de fondo es un hecho superveniente para efectos de la suspensión, por lo que no tendría recelo en aceptar que se trata de un hecho generado por el propio Poder Judicial pero en un asunto diferente, lo que es un hecho de conocimiento notorio para éste, en tanto que por lo que se refiere a las observaciones del delegado del Poder actor, propuso al ponente que se precise en el engrose que los magistrados respectivos ya no deben permanecer en el cargo, lo que se aceptó por el señor Ministro ponente Silva Meza.

Además, propuso enmendar lo señalado en el último renglón del párrafo central de la foja ochenta del proyecto que señala que concluyó el encargo del Magistrado *****

como Presidente del Tribunal y que actualmente no existe titular del Poder Judicial de la entidad.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que aun cuando parezca sutil, lo cierto es que el hecho superveniente son las consecuencias derivadas de la resolución adoptada por el Pleno al resolver el amparo en revisión 492/2010, promovido por ***** y coagraviados, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y de otras autoridades, siendo conveniente realizar los matices respectivos en el proyecto, lo que se aceptó por el señor Ministro Ponente Silva Meza.

El señor Ministro Franco González Salas propuso considerar que entre los hechos supervenientes a los que se refiere el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible considerar las consecuencias jurídicas de un fallo emitido por este Alto Tribunal cuando la resolución tuvo efectos, es decir, cuando cambió la situación jurídica, por lo que obliga a revocar de manera parcial o total la suspensión concedida originalmente.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó a favor del proyecto y recordó que la suspensión se concedió para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, es decir, para que no tomaran posesión los magistrados y el

consejero de la Judicatura del Estado de Morelos que habían sido propuestos en el decreto impugnado, debiendo considerarse que con posterioridad se resolvieron la controversia constitucional 88/2008 y el amparo en revisión 492/2010, con lo cual se determina un cambio importante en cuanto a la integración del Tribunal Superior del Estado de Morelos, dando lugar a que concluya el nombramiento del magistrado que fungía como Presidente de éste, lo que trae como consecuencia que éste ya no pueda funcionar adecuadamente, ya que se integra por trece magistrados y su quórum legal es de nueve de ellos, por lo que si actualmente sólo quedan ocho, se impide el funcionamiento del Pleno del mismo, por lo que de subsistir la suspensión se afectaría a una institución fundamental del Estado de Morelos.

Agregó que no es obstáculo para revocar la suspensión el hecho de que se haya recibido promoción en el sentido de que antes de concluir con su encargo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad debía contar con un periodo de transición para llevar a cabo la entrega de su puesto, pues únicamente se estaría ante una transición con problemas de operatividad, por lo que se manifestó a favor del proyecto compartiendo las modificaciones aceptadas, sin que le afecte considerar como hecho superveniente las dos resoluciones antes referidas.

El señor Ministro Silva Meza agradeció y aceptó las observaciones realizadas.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto consistente en negar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos legislativos atribuidos al Congreso del Estado de Morelos, inherentes al nombramiento y designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como de un Consejero de la Judicatura estatal, inclusive por lo que ve a sus adscripciones e incorporación en nómina, con las prestaciones y salarios que constitucional y legalmente les correspondan en razón de la fecha de su designación y toma de protesta, conforme a los Decretos Legislativos 1568 y 1569, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos el veintinueve de julio de dos mil nueve, se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos señalados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 2. 2/2010

Acción de inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el Procurador General de la República en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, demandado la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintinueve de diciembre de dos mil nueve. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee respecto del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal, en términos del considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, conforme a lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de esta ejecutoria. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”*.

El señor Ministro Valls Hernández realizó la presentación del asunto precisando los argumentos que sustentan las propuestas contenidas en éste y propuso definir, en primer término, si es o no procedente la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero, competencia; segundo, oportunidad de la presentación de la demanda; y tercero, legitimación activa; respecto de los cuales los señores Ministros manifestaron su unánime conformidad.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se manifestó a favor del proyecto en cuanto a la propuesta de sobreseimiento respecto del artículo 391 impugnado. Al respecto sostuvo que el tema ha sido objeto de innumerables discusiones al seno de este Alto Tribunal, buscando establecer un estándar constitucional para determinar en qué supuestos se está en presencia de un nuevo acto legislativo, considerando que en cada caso concreto se presentan particularidades que impiden establecer un criterio general, atendiendo a la diversidad de las prácticas parlamentarias.

Recordó que inicialmente se sostuvo en la tesis 27/2004 que en términos del principio de la autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un nuevo acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento en idénticas formalidades a las que dieron nacimiento a aquélla, lo que podría ser impugnado mediante una acción de inconstitucionalidad sin que obste la reproducción íntegra de lo dispuesto con anterioridad.

Señaló además que posteriormente el referido criterio fue matizado mediante la tesis 96/2007 debido a que en el caso que lo originó, el legislador ordinario durante el proceso legislativo manifestó su voluntad de no reformar una norma, ya que del texto aprobado se advertía que en realidad se modificó su alcance jurídico.

Indicó que un tercer caso, es el sostenido al resolver la contradicción de tesis 41/2003 en el que se sustentó que la cesación de efectos de la norma general impugnada cuando dejó de ser vigente como consecuencia de un nuevo acto legislativo, únicamente operaría respecto de la parte que fue motivo de aquél, aunque se hubiera emitido con el mismo texto de la norma anterior o variado en alguno de sus párrafos, indicando el legislador su voluntad mediante la inserción del texto que se repitió o modificó, intercalándolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos de los textos en los que permaneció la misma norma o alguna de sus partes al no ser objeto de nuevo acto legislativo.

Por último, recordó la tesis 17/2009 en la cual el punto jurídico que le dio origen se refiere solamente al supuesto en el que la materia de la reforma impugnada no se dirige a un cambio en su contenido normativo, sino a la identificación numérica de las disposiciones que contiene debido a la incorporación de otras diversas.

Estimó que la variación de criterios sobre lo que puede entenderse como un nuevo acto legislativo, ha variado de caso en caso atendiendo a las circunstancias presentadas en cada asunto, considerando la diversidad de prácticas parlamentarias, por lo que estimó que en cada caso este Alto Tribunal debe abordar el análisis respectivo.

En el caso concreto, sostuvo que la publicación del artículo 391 impugnado en los mismos términos en que se había publicado desde el veinticinco de mayo de dos mil no constituye un nuevo acto legislativo, sin que sea aplicable el criterio citado inicialmente, para lo cual debe analizarse el respectivo procedimiento legislativo ya que la modificación del citado numeral no fue objeto de la iniciativa correspondiente, sino que fue al seno de la Comisión dictaminadora que se incluyó tal disposición, derivado de que diversos diputados del Partido Acción Nacional consideraron que su contenido se relacionaba con la iniciativa original de la reforma del artículo 146 del propio ordenamiento, proponiendo en un primer momento, una modificación al texto y, posteriormente, adicionar un párrafo a su contenido.

Por ende, previo a la emisión del dictamen que se sometería al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión legislativa correspondiente votó porque no se modificara el citado artículo 391 y posteriormente, en el Pleno de la propia Asamblea Legislativa nuevamente se

determinó no modificar el texto del citado numeral por mayoría de votos. No obstante, se deliberó ante el referido Pleno, sin que se aprobara por la mayoría necesaria.

Por el contrario, la voluntad mayoritaria del órgano legislativo fue no modificar el citado artículo 391, en su sentido formal y material, pues pese a que podría estimarse que se sometió a un procedimiento para la modificación de su alcance jurídico o la precisión de algún punto que pareciera ambiguo u obscuro como se establece en la tesis 17/2009, no sucedió tal situación, lo que se corrobora con lo manifestado por el Procurador General de la República en cuanto a que el citado numeral no fue objeto de modificación alguna, por lo que la nueva publicación del artículo 391 controvertido no generó en automático la creación de un nuevo acto legislativo como podría parecer que se desprende de la tesis 27/2004 pues su inclusión en el procedimiento legislativo no siguió las mismas formalidades que para su nacimiento ni tampoco sufrió modificación alguna.

Por ende, estimó que debe declararse que la impugnación relativa al numeral citado es improcedente y se debe decretar el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad en contra de éste.

Además, estimó que el motivo de improcedencia que se actualiza en relación con dicho numeral, es suficiente

para determinar que éste no es materia de la presente acción de inconstitucionalidad y que, por ende, no es necesario realizar pronunciamiento alguno sobre los argumentos que pretende en su declaratoria de invalidez, recordando que la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma general, no implica que se tengan por impugnadas otras disposiciones que puedan guardar algún grado de relación con aquélla y que constituyan la materia propia del asunto, pues ello equivaldría a hacer nugatorio el sistema previsto tanto en la fracción II del artículo 105 constitucional como en su Ley Reglamentaria, de donde se desprende la existencia de un plazo para hacer valer una acción de inconstitucionalidad, ya que de lo contrario se permitiría que las disposiciones que no fueron modificadas por voluntad de los Órganos Legislativos, formen parte de la materia de impugnación, trastocando tanto el sistema de impugnación como la voluntad de éstos, por lo que consideró que en el proyecto debía señalarse de manera expresa que por efecto de la improcedencia decretada, ésta también alcanza la pretendida impugnación indirecta hecha valer por efecto de la mencionada declaratoria, con lo que debía sustentarse la propuesta de improcedencia de la supuesta impugnación indirecta promovida por el Procurador General de la República relativa al artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal y que, sustentará en el sentido de su voto en este tema, proponiendo que tales argumentos se incluyan en el engrose respectivo.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra del proyecto señalando que el pretendido error de la Asamblea Legislativa no es relevante para los efectos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, la cual establece en su artículo 60 que la acción de inconstitucionalidad se podrá promover dentro de los treinta días naturales posteriores a la publicación en el correspondiente medio oficial lo que se relaciona con lo previsto en la tesis de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA”.

Agregó que difícilmente se podría determinar si se trata de un error de publicación, ya que jurídicamente no es posible evaluar el estado mental de los legisladores, máxime cuando efectivamente existió una propuesta de modificación del artículo aunque ésta haya sido desechada. Recordó que el hecho de que el resultado haya sido negativo implica que el artículo impugnado fue sometido a un proceso de reflexión dentro del órgano legislativo, lo que dificulta concluir que se trata de un error y que no existió la intención de la reforma respectiva, siendo aplicable el precedente se encuentra en la tesis P./J. 27/2004.

Precisó que aun considerando lo previsto en la tesis de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL

LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE MODIFICÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OBSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA”, procedería la impugnación del artículo citado y, por ende, su estudio de fondo.

Recordó que pese a que originalmente participó del criterio mayoritario, posteriormente lo rectificó, por lo que su opinión consiste en que no cualquier modificación de una norma a cargo del legislador implica la producción de un nuevo acto legislativo, sino que se requiere un cambio material y no sólo formal.

En ese orden, consideró que en el caso concreto se debería cuestionar si derivado de la reforma del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, el artículo 391 del referido ordenamiento sufrió alteración en su alcance jurídico, es decir, algún cambio material aun cuando éste sea implícito, lo que desde su perspectiva implica una respuesta afirmativa, toda vez que el contenido del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, antes de la reforma del veintinueve de diciembre de dos mil nueve definía al matrimonio como “la unión libre de un hombre y una mujer

para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informal; debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que esta ley exige”, en tanto que después de la citada reforma se modificó para definirse como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua; debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código”, de donde se desprende que la reforma alteró el alcance jurídico de la norma modificando la condición de aplicación según la cual, para que exista y sea válido un matrimonio, no es necesario que se trate de personas de distinto sexo, sino que puede tratarse de dos personas independientemente de su sexo.

En ese tenor, señaló que para determinar si dicha reforma supone una diversa modificación al alcance jurídico del artículo 391 del citado ordenamiento, es necesario llevar a cabo un análisis de los elementos que conforman la segunda norma al señalar que “los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque uno sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad, cuando menos; y que se

acrediten además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior”.

Al respecto señaló que la norma es constitutiva y prevé diversas condiciones que se deben cumplir para la adopción, como son: 1. Que ambos cónyuges o concubinos estén conformes en considerar al adoptado como hijo; 2. Que al menos uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo 380 del referido ordenamiento legal, es decir, que sea mayor de veinticinco años; 3. Que la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad, cuando menos; 4. Acreditar que cuentan con medios bastantes para proveer a la subsistencia, y educación, entre otros, del menor adoptado, que la adopción sea benéfica para la persona que trate de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma; y que el adoptante sea persona apta y adecuada para adoptar.

Precisó que es claro que el concepto “cónyuges” a partir de la reforma impugnada, ya no se traduce necesariamente en un hombre y una mujer sino que las variables aumentan a personas del mismo sexo, toda vez que si bien es cierto que antes de la reforma era posible que personas en una relación con otra del mismo sexo, como es la de sociedad de convivencia, pudieran adoptar; la relación específica de los cónyuges se modificó estableciendo el universo de sujetos adoptantes y, por tanto, el alcance

jurídico de las normas impugnadas, de manera que el artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal alteró su alcance jurídico respecto de la definición legal de “cónyuges” mediante la reforma del artículo 146 del citado ordenamiento.

Agregó que de aceptar la procedencia de dicho análisis no se provocaría ningún tipo de análisis oficioso, ya que no existe la posibilidad de entrar a éste aun cuando se den las condiciones de la modificación formal y material de la norma en cuanto a sus alcances.

Precisó que en principio, debe existir la impugnación de la norma, para posteriormente analizar si ésta se modificó en su contenido formal y material.

En relación con los efectos, subrayó que aun considerando la norma como inconstitucional, este Alto Tribunal no tendría que convertirse en un legislador positivo, como lo sostiene el promovente y se acepta en el proyecto, pues se cuenta con diversas alternativas para modular la sentencia que no implica la legislación directa desde una hipotética interpretación conforme hasta la modulación de los efectos temporales de la invalidez para que el legislador sea el que realice las adecuaciones correspondientes.

Por tanto, se manifestó en contra de la propuesta del sobreseimiento del proyecto y estimó que éste debía

retirarse para incluir el análisis de fondo relativo a la impugnación del artículo 391 del citado ordenamiento para permitir que este Alto Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del matrimonio de personas del mismo sexo y del sistema de adopción.

El señor Ministro Aguirre Anguiano recordó que respecto de los criterios sostenidos con anterioridad únicamente los señores Ministros Franco González Salas y Cossío Díaz han votado en contra del mayoritario, en la inteligencia de que el señor Ministro Cossío Díaz ha indicado que ha modificado la rigidez de su postura cuando prevalezca en la textualidad de una norma, pero materialmente su alcance pueda sufrir una derivación diferente en cuanto a su órbita de aplicación por pertenecer a un sistema, indicando que estaría por la procedencia si se considera que se trata de un nuevo acto legislativo, surgiéndole interrogantes respecto de un nuevo acto legislativo.

Señaló no compartir la propuesta consistente en que en cada caso concreto debe analizarse si se trata de un nuevo acto legislativo pues ello afectaría el principio de certeza y generaría incertidumbre a los justiciables, reconociendo la importancia de fijar precedentes aplicables a los casos concretos, agregando que si bien los precedentes no deben petrificarse como se advierte del sistema de sustitución de Ministros y de modificación de jurisprudencia, no es

conveniente que se adopte un criterio que impida fijar un precedente, reconociendo la complejidad del tema. Además, hizo referencia a las consideraciones sostenidas por los señores Ministros Sánchez Cordero de García Villegas, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Silva Meza, Valls Hernández y Presidente Ortiz Mayagoitia y en la sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil ocho al conocer de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.

En ese orden, reiteró su oposición a que no se fije un criterio general sobre la existencia de un nuevo acto legislativo, manifestándose a favor de que se estudie la validez del impugnado artículo 391.

El señor Ministro Franco González Salas señaló que efectivamente en participaciones anteriores ha sostenido que no había un nuevo acto legislativo en cuanto que era exclusivamente el criterio que apareciera en el decreto de promulgación y en la publicación de la reforma, sosteniendo que se trata de situaciones distintas y que el criterio puede construirse de manera que se pueda abarcar el mayor número de casos, recordando que en ese sentido, el señor Ministro Cossío Díaz ha venido precisando el alcance de su criterio, considerando que sí debe partirse de un criterio general y valorar las particularidades de cada caso concreto.

Recordó que tal como se advierte de su voto particular relativo a la acción de inconstitucionalidad 29/2008, ha sostenido que una norma es producto de un nuevo acto legislativo cuando directa o indirectamente en virtud de un proceso legislativo, ve modificado su contenido sustancial, sentido o alcance, lo que ocurre de manera directa cuando el texto de la norma o del enunciado normativo es objeto de una reforma que altera su alcance o sentido, pero también puede modificarse éste de manera indirecta, recordando que todas las normas forman parte de un sistema normativo y que, en ocasiones, la misma integra una norma compleja, por lo que al modificarse o alterarse otro elemento normativo del sistema o componentes de la norma compleja de la que forma parte, aquélla puede verse también modificada, como consecuencia de la misma, sin que hubiese cambio alguno en su propio texto.

Por ende, en el caso concreto, consideró que se está en presencia del segundo supuesto que ha sostenido, compartiendo los argumentos expresados por el señor Ministro Cossío Díaz, pues si se viera aisladamente el texto del artículo 361 impugnado se sostendría que no hay nuevo acto legislativo; sin embargo, ha señalado que las normas forman parte de un sistema y cuando se transforman o modifican otras que inciden directamente en su texto, pueden cambiar su alcance y sentido de manera medular, como sucede respecto del citado numeral, por lo que en este caso, originalmente el diverso 146 establecía una definición

de matrimonio que con la reforma impugnada se amplía, aunado a que en el proceso legislativo sí fue motivo de discusión el texto del artículo 391 en comento y de las intervenciones realizadas en dicho proceso se advierte que hubo pronunciamientos en el sentido de que este numeral no debía quedar en los mismos términos pues implicaba el problema de la adopción que difiere del diverso del matrimonio, ya que al modificarse el artículo 146 se modificó el alcance del diverso 391, ambos del ordenamiento citado, por lo que el alcance de este último, actualmente es acorde con lo previsto en el diverso 146 impugnado, considerando que en el caso concreto la norma sí varió en cuanto a su alcance y sentido respecto del texto que tenía anteriormente pues está íntimamente vinculado con el citado numeral que fue motivo del proceso y se publicó en el decreto de mérito.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó a favor del proyecto señalando que aun cuando pueda sostenerse que se está en presencia de un nuevo acto legislativo aunque se hubiera mantenido el mismo texto, no es el supuesto del caso concreto, porque lo que se sometió a discusión y votación fue la adición que se rechazó y no el texto intocado del 391 del Código Civil para el Distrito Federal, recordando que para que se pueda considerar que se trata de un nuevo acto legislativo es necesario que la norma derive de un proceso legislativo en el que el texto del dispositivo de que se trate, haya sido sometido expresamente a la consideración del legislador y haya sido

materia de un acto positivo de aprobación que puede estar dirigido tanto a una nueva ley, como a la modificación de un texto preexistente, de manera que durante el proceso legislativo será necesaria la aprobación de cualquiera de estos supuestos, lo que significa que lo que no ha sido materia de la iniciativa ni sometido a votación por el legislador, no puede ser considerado como un nuevo acto legislativo, toda vez que no ha pasado por el proceso legislativo previsto en la Norma Fundamental y en las constituciones locales.

Precisó que en el supuesto de que exista una iniciativa mediante la que se proponga una reforma a determinada norma jurídica, la materia que se somete a discusión de los legisladores es únicamente la reforma misma, la que puede constituirse por una adición, modificación normativa o eliminación de parte del texto, por lo que consideró que al someter a la aprobación de los legisladores una reforma en cualquiera de sus formas, se debe aprobar la materia de la reforma y no el texto ya existente.

Indicó que el criterio sostenido por aquéllos que se manifiestan en contra del proyecto, redundaría en contravención a la seguridad jurídica, evadiendo los plazos procesales para la impugnación de una norma, dándole a una disposición legal no discutida una reviviscencia en perjuicio del orden jurídico procesal, pues mediante ésta se reinicia el plazo de impugnación que había fenecido, lo que

sería contrario al proceso legislativo y a la permanencia de la ley, recordando que las instituciones no son las personas sino que su existencia, compromiso y decisión, trasciende a los sujetos que las conformaron.

Recordó que los procesos legislativos no se constituyen por ratificaciones ni novaciones tácitas de las normas, pues la propia Constitución prevé que la materia de las iniciativas se someterá al proceso legislativo correspondiente, de manera que si una iniciativa se constituye por una reforma legal, será ésta el objeto y fin del proceso legislativo correspondiente.

Precisó que lo anterior toma importancia cuando el texto impugnado no fue parte de la iniciativa ni materia de votación positiva, sino que la materia legislativa se constituía por la adición propuesta en la iniciativa, entendida ésta como la primera etapa del proceso legislativo, o como propuesta formulada durante el proceso mismo en el propio dictamen.

Recordó que durante el proceso legislativo los diputados pueden sugerir cambios y modificaciones, lo que tiene sustento en el Reglamento Interior de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en cuyos artículos 32, 117, 86 y 136 se advierte que un dictamen puede someterse como un agregado a la iniciativa original y que las normas citadas denominan también como proposición o modificación a la iniciativa misma, lo que debe tomarse en cuenta dentro

del marco del acto legislativo preexistente y vigente, siempre que no se trate de la elaboración de un cuerpo normativo completo, pues en este caso, efectivamente puede hablarse de una nueva norma jurídica; no obstante que se repita el texto idéntico de una norma porque lo sometido a consideración, debate y votación del legislador, es la iniciativa integral de la nueva ley, de manera que se advierte que las disposiciones contenidas en este nuevo cuerpo legal, han sido materia de la iniciativa y, por tanto, de su discusión conforme al proceso legislativo constitucional, pese a que su texto pueda ser idéntico al de la ley anterior.

En relación con los criterios jurisprudenciales señalados, consideró que subyace el principio general relativo a que se está en presencia de un nuevo acto legislativo a pesar de que se trate del mismo texto preexistente siempre que éste haya sido materia del proceso legislativo y, por tanto, sea voluntad del legislador reiterarlo, pues del análisis mediante su discusión y su consecuente votación se podrá manifestar y comprender la voluntad del legislador.

Además, indicó que de conformidad con lo sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dicha voluntad legislativa se puede dar en el caso en que sin la expedición de un nuevo cuerpo legal sometido formal y expresamente a la consideración del legislador y cuando expidiéndose de manera integral una nueva ley, se

Sesión Pública Núm. 73

Jueves 1° de julio de 2010

reproduzcan los textos de alguno de sus artículos, recordando que la condición indispensable se da cuando el legislador pudo manifestar su voluntad, discutió y votó el texto propuesto, aunque el resultado pueda ser modificarlo o reiterarlo.

Precisó que en el caso concreto, se sometió a la voluntad del legislador la adición al artículo 391 del Código Civil propuesta por las Comisiones Unidas que realizaron el dictamen de la iniciativa original ya que las demás redacciones no fueron materia del conocimiento del Pleno, de donde se desprende que el texto actual no fue modificado, aunque sí transcrito en el Decreto de mérito, además de que la intención de la Comisión fue la presentación como iniciativa, en términos de lo previsto en el artículo 32 del Reglamento aplicable y solamente esa adición; recordando las intervenciones de los diputados ***** y *****, que sostuvieron que se trataba de un candado que no garantizaba que cualquier pareja de un mismo sexo pudiera ejercer el derecho de adopción, así como la diversa reserva del diputado Medina respecto del artículo 146 y de la diputada Contreras Julián en relación con el artículo 391 impugnado.

Indicó que respecto de la propuesta sobre la eliminación de las adiciones al artículo 391 que se sometió a votación y se aprobó con treinta y un votos a favor, veinticuatro en contra y nueve abstenciones, de donde

resaltó que la materia de la discusión fue el texto que se pretendía adicionar al artículo 391, sin que se propusiera la discusión del preexistente texto del citado artículo 391, por lo que la posibilidad jurídica o legislativa de generar un nuevo acto normativo se centró en que se establecía una prohibición respecto de la adopción.

Agregó que dentro de la inseguridad que pudiera generar la práctica de considerar que una norma es un nuevo acto legislativo cuando no sufrió modificación alguna y que no fue la materia de iniciativa ni previa, ni agregada en el Dictamen, sólo por el hecho de que se repite en una publicación, se estaría generando en el caso del amparo contra leyes la oportunidad para que la autoridad eludiera el cumplimiento de la sentencia, ya que a pesar de declararse la inconstitucionalidad de una norma bastaría su nueva publicación sin discusión ni votación para considerar que existe un nuevo acto legislativo que dejara sin efectos la protección constitucional otorgada.

Por ende, se manifestó en contra de la consideración vertida por los señores Ministros que consideraron que el artículo 391 del Código Civil constituye un nuevo acto legislativo, pues respecto del texto publicado no se promovió iniciativa, ni previa, ni dentro del dictamen y, por tanto, no fue sujeto de discusión ni votación; por lo tanto, no se estuvo ante proceso legislativo alguno, recordando que tuvieron tal carácter las diversas adiciones propuestas por las

Comisiones dictaminadoras que fueron sometidas a discusión y votación que no fueron aprobadas por la mayoría.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas indicó que el señor Ministro Franco González Salas precisó que “en el caso concreto” está en contra del proyecto debiendo tomarse en cuenta que en este proceso legislativo, tal como lo sostuvo el señor Ministro Aguilar Morales, no se siguió el procedimiento legislativo ni fue objeto de iniciativa el artículo 391 en comento, por lo que en cada caso debe analizarse el proceso legislativo respectivo.

El señor Ministro Gudiño Pelayo compartió la relevancia de los precedentes siendo conveniente que se citen en las resoluciones. Además, indicó que precisaría el alcance de su criterio considerando que cuando se reitera o reproduce un texto, existe la presunción de que el legislador tuvo la intención de reiterarlo, salvo cuando dentro del proceso legislativo se desprenda la voluntad del legislador de no reformarlo, como sucede respecto del caso concreto, considerando que su publicación se debió a un error, reiterando que aceptar tal situación como un nuevo acto legislativo acarrearía las consecuencias a que hizo mención el señor Ministro Aguilar Morales.

Señaló que el artículo 146 reformado no provocó modificar el alcance del diverso 391, ya que el artículo 390

prevé que las personas libres de matrimonio se encuentran en posibilidades de adoptar, en tanto que el diverso 391 impugnado hace referencia a los concubinos, por lo que no advirtió la repercusión de la reforma de aquél sobre este numeral, ya que, además, se prevén diversos requisitos para la adopción, tomando en cuenta que el sistema de adopción gira sobre la potestad del juez de determinar la idoneidad del adoptante y el interés superior del adoptado, por lo que precisó que su voto sería en el mismo sentido que el de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra del proyecto en el tema concreto ya que la discusión sobre el procedimiento legislativo correspondiente respecto del artículo 391 es irrelevante, toda vez que la modificación de lo establecido en el diverso 146 necesariamente modifica el sistema respectivo, por lo que al formar parte de un sistema se modificó el sentido del referido 391, estimando conveniente acudir a la diferencia entre texto y norma, ya que en el caso concreto no se modificó el texto de este numeral pero sí su significado. Recordó que existen disposiciones complejas o ambiguas de las que pueden derivar alternativamente distintas normas o disposiciones sinónimas que dan lugar a la misma norma; varias disposiciones que dan lugar a la misma norma o disposiciones que conjuntamente consideradas dan lugar a una norma, supuesto en el que se encuentra el citado numeral.

Agregó que el concepto del matrimonio cambia con la modificación del artículo 146 impugnado por lo que la nueva concepción de matrimonio incide en el concepto de cónyuges y en el ejercicio del derecho de adopción, por lo que se ha alterado el significado del artículo 391 del propio Código.

Señaló que existe un problema en la argumentación del proyecto pues la lógica narrativa versa sobre si se está o no en presencia de un argumento de invalidez indirecta, siendo que se trata de un problema de validez directa del artículo 391 señalado, además de que en la demanda se cuestiona frontalmente este numeral, alegándose por la Procuraduría General de la República el interés superior del niño y un concepto de familia que desprende del artículo 4º constitucional, por lo que es necesario analizar la validez del nuevo sentido del artículo 391 impugnado, por lo que cuestionó si este numeral cambió o no de sentido y si, en su caso, se dejará de estudiar el tema de la adopción de los menores, dejándolo a interpretaciones y de manera ambigua se estaría declinando el ejercicio de una competencia constitucional que implicara dejar las cosas en un estado de incertidumbre tanto para los cónyuges que permite la nueva normativa como para los menores que podrían ser adoptados.

El señor Ministro Silva Meza se manifestó a favor del proyecto y de las consideraciones realizadas por el señor Ministro Valls Hernández, estimando que se hace referencia a una realidad cultural de la sociedad mexicana y a la Ciudad de México. Recordó que el texto del artículo 391 impugnado es el mismo que tenía antes de la publicación del Decreto impugnado y en cuanto a su contenido material consideró que en el caso sería difícil hablar de una inconstitucionalidad sobrevenida, ya que dicho numeral no ha sufrido modificación alguna aunque ello se pretendió por los cauces legislativos, precisando las particularidades del proceso legislativo respectivo, en el cual se proponía agregar que: “para los efectos de este artículo no procede la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”.

Estimó que la decisión final del legislador fue no incluir el citado candado y dejar el precepto vigente en los términos en que se encontraba anteriormente por lo que la inclusión del artículo 391 en el Decreto impugnado lleva a concluir que ésta no constituye un nuevo acto legislativo que pueda ser susceptible de análisis en la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en cuenta los precedentes fijados por este Alto Tribunal y las votaciones que ha emitido en el pasado.

En cuanto a los precedentes destacó la jurisprudencia 17/2009 cuyo rubro señala: “ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA”, considerando que interpretada a contrario sensu en el caso concreto no hay modificación normativa del artículo 391 impugnado ya que la reforma impugnada no modifica su contenido.

Reconoció que el Decreto impugnado contiene una relevante modificación del concepto de matrimonio lo que podría implicar que cualquier implicación jurídica derivada del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo tiene su lugar en esta nueva concepción, tomando en cuenta que el cambio en su concepción deriva de la nueva definición legal y no en virtud de que se haya reformado todo el contexto normativo que puede ser consecuencia directa o indirecta del matrimonio civil, pues son diversas las consecuencias jurídicas que puede haber en relación con la nueva definición de dicha institución, sin que su modificación implique que, por ello, en esta acción de inconstitucionalidad deban analizarse todas sus consecuencias.

Recordó el texto del artículo citado 391, considerando que su vida jurídica es diversa a la del matrimonio y la concepción de la adopción como fue plasmada en dicho precepto no fue objeto de modificación alguna, siendo relevante que este numeral por sí solo prevé la adopción en el matrimonio o en el concubinato y si se declarara su invalidez, ello implicaría dejar sin fundamento la posibilidad de que las parejas pudieran adoptar hijos, por lo que no existiría el referente normativo para que se lleve a cabo, además de que dicho numeral no prevé la prohibición de que los adoptantes sean parejas del mismo sexo, ya que si así lo determinara la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaría legislando, lo que es ajeno a sus atribuciones.

Finalmente, destacó que el hecho de que el citado artículo se publicara en el Decreto impugnado no permite impugnarlo en esta acción de inconstitucionalidad ya que no se está ante un nuevo acto legislativo y no puede llevarse a cabo reproche alguno respecto de su constitucionalidad si la figura contenida en éste no ha sufrido modificaciones, de manera que manifestó que votaría a favor de la propuesta en el sentido de sobreseer respecto del artículo 391 mencionado.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia reconoció lo opinable del tema, considerando que la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal le dio un nuevo

alcance al artículo 391 del propio Código que establecía hasta antes de ello la adopción para el matrimonio celebrado entre personas del distinto sexo, de lo cual estuvo consciente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dadas las particularidades del proceso legislativo, en el cual se presentaron propuestas para preservar el sentido anterior de dicho numeral, por lo que al publicarse con las mismas palabras se produjo un nuevo acto legislativo, ya que con ello se precisaron sus alcances.

Además, precisó que se trata de una modificación expresa en el sentido de que los matrimonios del mismo sexo pueden adoptar hijos, de conformidad con lo resuelto por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Estimó que si bien la reforma realizada trasciende a diversas instituciones, como las previstas en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, lo cierto es que éstas no están al alcance de la citada Asamblea Legislativa.

En ese tenor, precisó que debe tomarse en cuenta que la publicación del artículo 391 con el mismo texto revela la intención del legislador consistente en que los matrimonios regulados en el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, con independencia de que se celebren entre personas del mismo o de diferente sexo, puedan realizar

adopciones, es decir, que aun cuando el artículo 391 no se haya modificado en su contenido, lo cierto es que el legislador siguió un mismo procedimiento legislativo en el cual decidió, por un lado, permitir la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y, por otro, permitir que los cónyuges del mismo sexo puedan adoptar, lo que viene a conformar un nuevo sistema normativo respecto de los derechos que asisten a un matrimonio de esa naturaleza, máxime que la restricción que se proponía establecer en el citado artículo 391 no fue aprobada por el órgano legislativo, por lo cual podría considerarse que tanto desde una óptica formal como material, la promulgación y publicación del referido *“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal”*, constituye un nuevo acto legislativo respecto del artículo 391 de mérito.

En abono a lo anterior, precisó que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesiones de veinte y veintisiete de octubre de dos mil nueve, resolvió las acciones de inconstitucionalidad 132/2008 y sus acumuladas 133/2008 y 134/2008, así como la diversa 96/2008, ambas bajo la ponencia del señor Ministro Góngora Pimentel, en las que se sobreseyó, en el primer caso, porque no todos los párrafos del precepto impugnado habían sido reformados y, en el otro, porque se reiteró el contenido de una fracción, con modificación de una “o”, se adicionó otra fracción y se

recorrió el párrafo siguiente, argumentándose en ambos casos, en forma similar, que por haberse reformado el precepto impugnado, se estimaba que habían cesado sus efectos y que la reproducción de un artículo en un acto de reforma, implica la exteriorización de la voluntad del legislador de reiterar el enunciado, señalando el sentido que debe darse a la concepción de una norma inserta dentro del cuerpo normativo, aun cuando se modifiquen otras normas del sistema y que por mínimo que sea el cambio que se origina en una ley o que se realice una reiteración, ello implica una iniciativa de ley, una discusión en torno y por supuesto, una votación y eso es lo que da la pauta para determinar lo que es el nuevo acto legislativo.

La señora Ministra Luna Ramos reconoció la complejidad del asunto así como lo indicado en el proyecto del señor Ministro Valls Hernández en cuanto a la reproducción íntegra del texto anterior del artículo 391 del Código Civil en el Decreto impugnado. Agregó la importancia de los precedentes que fija este Alto Tribunal para dar certeza a los gobernados, para lo cual hizo referencia a la evolución del criterio relativo al acto nuevo.

En principio refirió a las modificaciones del impuesto sobre la tenencia vehicular, incluso durante la Octava Época, reconociéndose que aun cuando no se modificaba ni en una coma el texto respectivo, lo cierto es que existía un nuevo

acto legislativo, criterio que se sostuvo hasta el año dos mil cuatro.

Posteriormente, en los años dos mil siete y dos mil ocho surgieron tres tesis que trascendieron a ese criterio, ya que en éstos se llegó a sostener que si había un cambio de identificación numérica en las reformas que se llevaran a cabo respecto de ciertos artículos, implicaba que no existía un acto legislativo nuevo o que si se movían los párrafos pero se conservaba el texto tampoco se tendría un acto legislativo nuevo, agregando que también se aprobó una diversa tesis en el sentido de que si no cambiaba el artículo pero sí su sentido, podría considerarse modificado en función de otros artículos, estimando que se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo, por lo que durante estos años se emitieron tesis que dieron un matiz al criterio relativo a que bastaba una nueva publicación para que hubiera nuevo acto legislativo.

Agregó que los señores Ministros Franco González Salas y Cossío Díaz se apartaron del criterio tradicional al sostener que era necesario analizar qué señalaba el nuevo texto para determinar si había nuevo acto legislativo debiendo atenderse al sentido de la norma para arribar a una conclusión al respecto.

A pesar de lo anterior, con esos matices y tomando en consideración los problemas suscitados en materia de

seguridad jurídica precisó que este Alto Tribunal se inclinó por seguir el criterio tradicional de que “hay que dar seguridad jurídica” y determinar que en cada ocasión que se dé una nueva publicación no importa que no se haya variado una coma, pues se trataría de un nuevo acto legislativo.

Además, refirió a la tesis de este Pleno de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO” resuelta en marzo de dos mil cuatro que obtuvo una votación unánime de diez votos, con la ausencia del señor Ministro Román Palacios, recordando que aun cuando se presentaron los matices referidos se retomó el criterio que permite brindar seguridad jurídica.

Recordó que los señores Ministros Franco González Salas y Cossío Díaz incluso atendieron al sentido material y no formal, aprobándose en su momento la tesis que lleva por rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO

CONSIDERADO AMBIGUO U OBSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO”, estimando que en el caso concreto existió la intención de no reformar el artículo 391 pero del texto aprobado se advierte que se modificó su alcance jurídico, debiendo estimarse que se está en presencia de un nuevo acto legislativo, tal como sucedió en el precedente que dio lugar a la referida tesis, el cual se aprobó por mayoría de nueve votos con el voto en contra de los señores Ministros Valls Hernández y Franco González Salas, recordando que ya había aceptado el criterio formal consistente en que bastaba que se tratara de una nueva publicación para que se diera un acto legislativo aun cuando el texto se considerará idéntico y no se hubiera variado una sola coma.

Señaló que existen diversas tesis aprobadas en dos mil ocho y dos mil nueve donde se ha aceptado el criterio formal para considerar que se trata de un nuevo acto legislativo.

Estimó que en el caso concreto, si bien en la iniciativa correspondiente no se hizo referencia al artículo 391 impugnado, lo cierto es que dentro del procedimiento legislativo sí se propuso realizar un agregado a dicho numeral, el cual fue rechazado; de donde deriva que sí formó parte de la discusión el citado numeral, existiendo una determinación expresa de la Asamblea Legislativa para ligarlo con el diverso 146, lo que implica que fue su intención

que la adopción regulada en el referido 391 sí se pueda realizar por cónyuges del mismo sexo.

Por ende, estimó que desde el punto de vista formal sí existe un nuevo acto legislativo respecto del artículo 391 en comento, como se ha considerado en las tesis de este Alto Tribunal desde la Octava Época, aunado a que de la lectura del actual artículo 146 en relación con dicho numeral, es posible sostener que existe un concepto jurídico distinto, de manera que sí se está en presencia de un nuevo acto legislativo, por lo que se manifestó en contra del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas señaló que el artículo 391 impugnado sí fue parte del proceso legislativo, indicando que incluso en la Sesión celebrada por la Asamblea Legislativa el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se reservó dicho precepto para la discusión, señalando que únicamente participó en ella una diputada del Partido de la Revolución Democrática para justificar por qué se suprimía el candado propuesto inicialmente, recordando la importancia de distinguir entre las instituciones del matrimonio y de la adopción, en la inteligencia de que hubo manifestación expresa de darle un sentido diferente al artículo 391 impugnado.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que conforme a la tesis referida por el señor Ministro Silva Meza el nuevo acto legislativo surge ante un cambio jurídico el cual se da

ante el cambio de la concepción de los elementos respectivos.

Por otro lado, el hecho de que no se hayan modificado diversos preceptos no es relevante para la resolución del asunto, pues si se hubieren impugnado se tendrían que analizar por este Tribunal Pleno.

Finalmente, precisó que algunas de las participaciones parecieran dar lugar a sostener que el hecho de estudiar la validez del artículo 391 impugnado llevaría a estimar que este precepto es inconstitucional, indicando que ninguno de los señores Ministros que están a favor de abordar dicho estudio se ha pronunciado sobre su constitucionalidad, señalando que por la seriedad del tema y con el objeto de evitar la ambigüedad que pudiera generarse es conveniente aclarar el sentido de las normas impugnadas y pronunciarse sobre su constitucionalidad.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reiteró que los que se pronuncian respecto del estudio del artículo 391 impugnado no estiman que este numeral sea inválido, sino únicamente que es necesario abordar la validez de dicho numeral. Incluso, señaló que en la eventualidad de que se declarara inválido el citado numeral ello no implicaría desaparecerlo sino, en todo caso, acudir a su interpretación conforme o bien si se decreta su validez con el sentido de incluir en el concepto de cónyuges a los matrimonios del

mismo sexo, ya que existe un planteamiento expreso en la demanda sobre la invalidez del citado numeral, en la inteligencia de que no podrían analizarse preceptos que no fueron impugnados sino únicamente los que son materia de un nuevo acto legislativo.

Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente Ortiz Mayagoitia, en contra de la propuesta del proyecto, se determinó no sobreseer en la controversia constitucional respecto del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal, publicado en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Código el veintinueve de diciembre de dos mil nueve en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, al constituir un nuevo acto legislativo y entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho precepto; los señores Ministros Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza votaron a favor de la propuesta.

Como consecuencia de la votación obtenida el señor Ministro Valls Hernández distribuyó el estudio de fondo correspondiente, en el que propone reconocer la validez del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal impugnado.

El señor Ministro Aguirre Anguiano propuso que para estar en posibilidad de resolver el asunto, se contara con pruebas periciales del DIF, del Instituto Mexicano de Orientación Sexual y de la Asociación Mexicana de Pediatría, así como con estadísticas respecto de las parejas con preferencia por personas de su mismo sexo con interés de adoptar, estudio que permita observar y medir las diferencias de educación, si es que existen, en un niño criado en un ambiente homoparental, así como psicodiagnósticos de niños y adolescentes criados en ambientes homoparentales con grupos de control de parejas de un mismo sexo y parejas del sexo opuesto, para calibrar las razones que se nos den en cuanto al fondo de las objeciones que se plantean en la acción de inconstitucionalidad, para así estar en una situación de decisión más informada. Además, propuso que no se subiera la propuesta distribuida a la página de internet.

El señor Ministro ponente Valls Hernández precisó que se trataba únicamente de una opinión de un miembro del Tribunal Pleno y no de una decisión de éste, por lo que no encontró inconveniente en que se subiera a la página de internet. Además, precisó que se está frente a un medio de control abstracto de constitucionalidad y no ante una litis, por lo que consideró que no era necesario contar con un peritaje, además de que en el proyecto se acompañan como anexos opiniones técnicas de instituciones de prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo que el señor

Ministro Aguirre Anguiano estimó que se trataba únicamente de opiniones personales muy respetables.

El señor Ministro ponente Valls Hernández indicó que se solicitó a la referida Universidad que designara a los maestros, científicos y académicos especializados para la elaboración de dichas opiniones.

El señor Ministro Gudiño Pelayo se sumo a la postura del señor Ministro Valls Hernández en el sentido de que se suba a internet el estudio respectivo. Además, consideró que era valiosa la propuesta del señor Ministro Aguirre Anguiano relativa a las estadísticas únicamente desde el punto de vista académico, toda vez que en cada caso concreto es el juez el que determinará aceptar o desechar la solicitud de adopción.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció porque se subiera el proyecto a internet y estimó que se le debía dar al asunto el mismo trámite que a cualquier otro, reiterando la posibilidad de analizarlo a la brevedad dada su importancia.

El señor Ministro Cossío Díaz también se pronunció porque se subiera el asunto a internet. Agregó que el proyecto cuenta con transcripciones de peritajes a partir de las páginas ocho y siguientes, por lo que parecería un poco incongruente sostener que en esta acción de inconstitucionalidad no se pueden tomar en cuenta peritajes.

Propuso que el señor Ministro Aguirre Anguiano, en aplicación de lo previsto en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles obtuviera en lo personal los elementos que a su juicio, fueran determinantes para la resolución del asunto como sucedió respecto de algunos señores Ministros en el asunto de los integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano portadores de VIH.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea apoyó la idea de subir el asunto a internet y desechó la posibilidad de la procedencia de un dictamen pericial, pues a lo largo de varios meses se ha obtenido la información suficiente respecto al tema, sin que se impida la oportunidad de que los señores Ministros que así lo deseen presenten los estudios que estimen pertinentes.

El señor Ministro Aguirre Anguiano retiró la moción de que no se subiera el asunto a internet.

El señor Ministro ponente Valls Hernández rechazó respetuosamente el calificativo de incongruencia respecto a que en el proyecto presentado se mencionan diversos dictámenes, señalando que en este únicamente se refiere a opiniones técnicas e informes.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas solicitó que la discusión del asunto se llevara a cabo al inicio del mes de agosto toda vez que la siguiente semana deberá

ausentarse. Agregó que cuenta con diversos estudios, opiniones y dictámenes que podría compartir con los integrantes del Tribunal Pleno respecto al asunto que se analiza.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional no se prevé la prueba pericial respecto de las acciones de inconstitucionalidad, por lo que solicitó que se sometiera a votación la posibilidad de celebrar a cabo una reunión privada para analizar la propuesta relativa a la prueba pericial a que se refiere el señor Ministro Aguirre Anguiano.

Sometida a votación la propuesta, se determinó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia que no es necesario celebrar una sesión privada para analizar la propuesta del señor Ministro Aguirre Anguiano, el cual votó en contra.

El Tribunal Pleno determinó por unanimidad de votos subir a internet la propuesta antes referida y por mayoría de votos que el análisis del asunto continúe en la sesión que se celebre el día tres de agosto próximo.

Sesión Pública Núm. 73

Jueves 1° de julio de 2010

El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto y los demás continuarían en lista, convocó al Tribunal Pleno para la sesión pública que tendrá verificativo el lunes cinco de julio de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluyó la presente sesión a las catorce horas con cinco minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.